

REPÚBLICA DE COLOMBIA



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

AUTO INTERLOCUTORIO No. _

Santiago de Cali, diciembre dos (2) de dos mil veinte (2020)

MAGISTRADO PONENTE: OSCAR SILVIO NARVÁEZ DAZA

MEDIO DE CONTROL:	Protección de los derechos e intereses colectivos (Acción popular)
EXPEDIENTE:	76001 23 33 000 2020 01463 00
DEMANDANTE:	Carlos Arturo Arango carliny18@yahoo.es
DEMANDADO:	Superintendencia Nacional de Salud

AUTO INADMITE DEMANDA ACCIÓN POPULAR

I. ANTECEDENTES PROCESALES

El señor Carlos Arturo Arango presenta demanda de acción popular en contra de la Superintendencia Nacional de Salud por la presunta violación a los derechos e intereses colectivos relacionados con la moralidad administrativa, el acceso al servicio público de salud de manera oportuna, eficaz y con calidad (artículo 1º de la Ley 1751 de 2015), a la seguridad y salubridad públicas y a los derechos de los consumidores y usuarios, por la iniciación de revocatoria de habilitación de la EPS MEDIMAS en los departamentos de Antioquia, Nariño, Santander y Valle del Cauca.

De acuerdo con lo anterior esta Corporación tiene competencia para conocer de la presente acción popular, en virtud de lo dispuesto en el numeral 16º del artículo 152 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), al estar demandada una entidad pública del orden nacional.

Ahora, se traen a colación los artículos que disponen los requisitos previos para interponer una acción popular los cuales son:

*“Artículo 144. Protección de los derechos e intereses colectivos. Cualquier persona puede demandar la protección de los derechos e intereses colectivos para lo cual podrá pedir que se adopten las medidas necesarias con el fin de evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los mismos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible.
(...)*

Antes de presentar la demanda para la protección de los derechos e intereses colectivos, el demandante debe solicitar a la autoridad o al particular en ejercicio de funciones administrativas que adopte las medidas necesarias de protección del derecho o interés colectivo amenazado o violado. Si la autoridad no atiende dicha reclamación dentro de los quince (15) días siguientes a la presentación de la solicitud o se niega a ello, podrá acudir ante el juez. Excepcionalmente, se podrá prescindir de este requisito, cuando exista inminente peligro de ocurrir un perjuicio irremediable en contra de los derechos e intereses colectivos, situación que deberá sustentarse en la demanda.” (...)

Artículo 161. Requisitos previos para demandar. La presentación de la demanda se someterá al cumplimiento de requisitos previos en los siguientes casos:



(...)

4. *Cuando se pretenda la protección de derechos e intereses colectivos se deberá efectuar la reclamación prevista en el artículo 144 de este Código.*” (Subraya este auto)

Teniendo en cuenta las disposiciones citadas el Tribunal inadmitirá la demanda para que el accionante aporte la prueba del requisito señalado en los artículos 144 y 161 del CPACA frente a la entidad demandada, ya que si bien la demanda indica la existencia de un perjuicio irremediable por el riesgo inminente y la puesta en peligro de los derechos de los consumidores y usuarios al acceso a la salud de manera continua y eficiente en plena emergencia sanitaria, olvida el demandante, que no basta con enunciar una premisa, sino que es necesario argumentarla de manera clara y detallada, lo cual no cumple en el presente caso, pues no ofrece todos los argumentos fácticos y jurídicos que permitan un estudio de fondo de la petición; y sin lugar a dudas, esta exigencia no se satisface con los argumentos expuestos por el accionante, en la medida en que los mismos no sustentan esa presunta vulneración.

No debe pasarse por alto que el no agotamiento del requisito de procedibilidad es una prerrogativa excepcional y por lo tanto deben cumplirse estrictamente las condiciones para prescindir de él “...cuando exista inminente peligro de ocurrir un perjuicio irremediable en contra de los derechos e intereses colectivos, situación que deberá sustentarse en la demanda...”. En este caso tal peligro “inminente de un perjuicio irremediable” no existe aún, o al menos no se observa claramente, puesto que la Resolución No. 10258 de 2020 expedida por la accionada, solo dispone el inicio de una investigación administrativa, que si bien puede resultar en la inhabilitación de la investigada, ello depende de la misma investigación, proceso administrativo dotado de las garantías y recursos propios, de modo que no es inminente sino incierto el resultado que el accionante estima seguro y por eso no puede decirse que *exista*.

Aunado a lo anterior, no encuentra el despacho *elemento probatorio* alguno que permita concluir que la decisión de la entidad accionada acarree para los derechos colectivos un perjuicio irremediable, por lo tanto es necesario que se arrimen a la solicitud las pruebas suficientes que acrediten la urgencia del trámite de la acción constitucional deprecada, como la gravedad del asunto, el inminente peligro de los derechos colectivos que se invocan como vulnerados o amenazados, y por lo tanto, debe afirmarse que se deja sin sustento probatorio la premisa que sostiene esa necesidad de intervención judicial inmediata y la posibilidad de prescindir del requisito de procedibilidad, pues los documentos que relaciona como pruebas “*Documentales*” no fueron aportados, y si bien algunos pueden hallarse por internet en las páginas de la Superintendencia accionada, al ser inspeccionados dichos portales, no se encuentra resolución alguna de revocatoria de autorización de funcionamiento de la EPS MEDIMAS, y solo aparece el comunicado de noviembre 13 de 2020¹.

Por esas razones, al no haberse cumplido las condiciones suficientes para prescindir del requisito de procedibilidad, el despacho requerirá al accionante, para que presente

¹ <https://www.supersalud.gov.co/es-co/Noticias/listanoticias/supersalud-revoca-funcionamiento-de-eps-medimas-en-4-departamentos>.



la prueba del cumplimiento del requisito señalado en los artículos 144 y 161 del CPACA frente a la entidad demandada o que sustente de manera fehaciente, sólida y suficiente, la *existencia* del perjuicio irremediable que le impida cumplir con aquél, además de que aporte el acto mediante el cual se revocó parcialmente la autorización de funcionamiento de MEDIMAS EPS.

II. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,

RESUELVE

PRIMERO. INADMITIR la demanda presentada por el señor Carlos Arturo Arango, en contra de la Superintendencia Nacional de Salud.

SEGUNDO. CONCEDER a la parte demandante el término de tres (3) días para que corrija su demanda subsanando los defectos indicados en la parte motiva de esta providencia, conforme a lo dispuesto al artículo 20² de la Ley 472 de 1998.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OSCAR SILVIO NARVÁEZ DAZA
Magistrado.

² **Artículo 20.** *Admisión de la demanda.* Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la presentación de la demanda o petición inicial, el juez competente se pronunciará sobre su admisión.

Inadmitirá la demanda que no cumpla con los requisitos señalados en esta ley, precisando los defectos de que adolezca para que el demandante los subsane en el término de tres (3) días. Si éste no lo hiciere, el juez la rechazará.